

AMENAZA EN CHILE

EN Chile hay en estos momentos doble número de civiles armados que de militares o fuerzas de policía. Una parte de estas armas las tienen los obreros que están constituidos en comités de defensa, que se mantienen alerta en sus locales sindicales y políticos, o en las mismas fábricas que están convirtiendo en fortalezas. Otra parte las tienen las fuerzas de la derecha, que abarcan desde el partido fascista Paz y Libertad —autor ya de atentados, asesinatos o asaltos y, por ello, fuera de la ley; pero que continúa actuando en la clandestinidad— hasta la democracia cristiana. Toda esta derecha mantiene la mayoría en la Cámara de Diputados. Mantiene esta mayoría desde el mismo momento en que Allende fue elegido Presidente en octubre de 1970, lo cual mantiene una forma visible legal de la lucha por el poder y la gobernación de Chile. En las últimas elecciones, la derecha perdió escaños cuando esperaba conquistar los suficientes como para reunir la mayoría de dos tercios que le hubiese permitido acusar de inconstitucional al Presidente y exigir, por medios legales, su destitución. Pero conservó, sin embargo, mayoría suficiente como para continuar obstaculizando la legislación presidencial, la vía hacia el socialismo propuesto por la coalición que sostiene a Allende. Con esta mayoría, ha votado una resolución exhortando al ejército, a las fuerzas armadas, que tomen sobre sí la responsabilidad de «restablecer el Imperio de la Constitución y de la Ley»: es decir, según la respuesta dada por el Presidente Allende, de «que adopten una posición deliberante frente al poder y asuman una posición política según las posiciones institucionales de la mayoría de una de las ramas del Congreso». Más claramente, en otro párrafo de Allende: «a que se indisciplinen contra la autoridad civil del Estado, a la que están subordinados por mandato de la carta fundamental». Al golpe de Estado. «Pedir a las Fuerzas Armadas que lleven a cabo funciones de gobierno al margen de la autoridad y dirección política del Presidente de la República, es promover el golpe de Estado».

EN los periódicos gubernamentales y en las centrales obreras, el lenguaje es naturalmente más claro. El Siglo dice que la decisión de la Cámara, «más que un acto parlamentario, es un engranaje del golpe de Estado, que es sinónimo de guerra civil, porque los trabajadores, encabezados por la clase obrera, tendrán que repelerlo en defensa de sus derechos». Puro Chile dice que la clase trabajadora tiene que «prepararse para responder a la violencia contrarrevolucionaria con la violencia revolucionaria». Y la CUT —Central Única de Trabajadores— advierte contra «los intentos golpistas del fascismo y la secesión». Ha dado la orden de «alerta máxima» y de mantenerse «en pie de guerra». La orden se cumple. Los obreros no abandonan las fábricas y están en contacto con sus dirigentes políticos. Están, al parecer, dispuestos a todo.

LA posibilidad del golpe de Estado, o de la ocupación del poder por las Fuerzas Armadas, parece, en efecto, bastante acentuada. Sus síntomas más visibles son el abandono del gobierno por parte de los ministros militares que figuraban en él desde el 9 de agosto, incorporación que se interpretaba como una concesión a la derecha, pero que no ha sido suficiente. Se fue primero el general Ruiz, de las Fuerzas Aéreas, encargado de la cartera de Obras Públicas y por lo tanto del transporte, que es el sector más abiertamente en conflicto, por la huelga de propietarios de camiones que dura ya desde hace más de un mes y que está costando al país unos 300 millones de pesetas diarios —aparte de una grave escasez en el abastecimiento de alimentos y artículos de primera ne-

cesidad— y un encarecimiento —escasez, encarecimiento y desorden que, por la conocida política del bumerang, sirve también para acusar al gobierno—; y dimitió alegando que no veía solución posible para el problema. En realidad lo ha hecho por la presión de sus compañeros. El almirante Montero, que representaba a la Armada en este gabinete, se ha mantenido; pero se sabe que en este caso sus compañeros no le han presionado con tanta fuerza porque hay rumores de amotinamiento y rebelión entre los marineros, que probablemente estallarían si Montero abandonase al gobierno. La defección más significativa ha sido la del general Carlos Prats, quien no solamente se ha marchado del gobierno, sino que ha pedido el retiro. Carlos Prats era jefe supremo del Ejército de Tierra; había apoyado la legalidad gubernamental desde el principio, había tenido que defenderse con las armas en la mano de un atentado de la extrema derecha y parecía la garantía máxima de que el Ejército se mantendría junto al Presidente. Cuando el 29 de junio se produjo un conato de sublevación militar en una guarnición pequeña, Carlos Prats mandó personalmente las fuerzas que la sofocaron.

¿POR qué abandona Prats al gobierno? Según él, se va porque no quiere dividir la institución a la que pertenece —esto es, el Ejército— y porque le ha impresionado una manifestación de mujeres que sucedió la semana pasada ante su domicilio —las mujeres de la derecha chilena están tomando parte activísima en la lucha contra Allende y la Unidad Popular—, manifestación en la que había esposas de algunos generales compañeros de Prats. Parece más cierto que fueron los maridos de estas manifestantes, los generales, los que han forzado a Prats al retiro. El jueves 23 de agosto —al día siguiente de la manifestación— hubo una reunión de generales en la Escuela Militar de Santiago y, al parecer, estos generales plantearon a Carlos Prats la necesidad de dimitir. Fuertes han debido ser las amenazas para que éste las haya aceptado. El hecho es que, al marcharse, al abandonar al mismo tiempo la cartera ministerial y el uniforme militar, Carlos Prats ha recibido el homenaje de todas las fuerzas gubernamentales, y se especula con la posibilidad de que ahora vuelva al gobierno que Allende está preparando (que quizá haya sido nombrado ya en el momento en que se publiquen estas líneas) y aparezca de nuevo como ministro, pero esta vez en calidad de civil, sin ninguna representación militar.



Los incidentes, disturbios y manifestaciones se suceden en Santiago de Chile.



Los estudiantes protestaron contra la decisión gubernamental de prolongar las vacaciones, decisión tomada para evitar disturbios universitarios.

ES la coincidencia de todos estos sucesos la que hace temer que lo peor sea posible: las manifestaciones de mujeres y de estudiantes —éstos protestaban por la decisión gubernamental de prolongar las vacaciones, decisión tomada para evitar disturbios universitarios—, la exhortación de la Cámara de Diputados al Ejército, la dimisión de los ministros militares, las reuniones de jefes militares, son sucesos simultáneos. En la derecha cunde la peligrosa idea de que este es precisamente el momento oportuno para derribar a Allende, el momento que se espera y que se prepara desde hace tres años. Y en la izquierda cunde la idea no solamente de la autodefensa, sino de la posibilidad de cumplir ahora la revolución. Como se sabe, Allende no solamente tiene el odio mortal de la derecha, sino que inspira un cierto temor por parte de la izquierda más radical o más revolucionaria. Le consideran un «irremediable reformista» y temen que sin una presión popular fuerte, Allende se inclinara ahora a pactar en alguna forma con la derecha, por lo menos con la democracia cristiana —en realidad, si no lo ha hecho aún ha sido por el exceso de exigencias de ésta, que cree que tiene en sus manos la clave de la situación—; es decir, que por evitar la guerra civil podría ceder en la vía socialista para la que fue votado y elegido.

AUNQUE la acumulación de odios es muy característica de una situación previa a la guerra civil, hay que considerar que muchas de las maniobras que se están realizando en estos momentos tienen carácter de amenazas, de jugadas, de elementos de disuasión. En primer lugar, no es seguro que el Ejército salga de su tradicional abstención en los asuntos políticos; más bien puede suceder que la retirada de los ministros militares obedezca a cumplir más estrictamente la abstención. No hay que olvidar que el Ejército chileno mantiene precisamente su unidad por el neutralismo; en cuanto se rompa, puede estar trágicamente dividido. En el Ejército chileno hay militares de derecha, pero también los hay de izquierda. Una de las razones que se han dado para la retirada de los militares es la de que Allende tenía preparada una lista de oficiales superiores que deseaba pasar a la reserva, para dejar el Ejército dirigido por la izquierda. No hay ninguna prueba. Parece más bien una invención parecida a la del famoso «complot de la Aspidá», en Grecia, de la supuesta depuración de generales derechistas, en cuyo nombre se dio el golpe de Estado que todavía dura. Y en la movillización obrera hay también mucho de respuesta previa, de advertencia. El espectro de una guerra civil es demasiado grave para que cualquiera de las dos partes se lance abiertamente a ella.

PERO no es imposible. De otra manera, no se ve claramente cuál puede ser la salida. Allende no puede ir demasiado lejos en el pacto con la oposición, porque se lo impedirían sus propios revolucionarios; pero la oposición no parece dispuesta a desarmar, sobre todo mientras mantenga el espejismo de que esta es la ocasión más propicia que ha tenido en los últimos años. La idea de un «golpe neutralista», de una toma de poder por los militares con la intención declarada de mantenerse alejados del enfrentamiento actual y gobernar provisionalmente al país en tanto se arbitra una solución civil, es muy difundida; pero difícilmente podría considerarse ese golpe neutralista que depusiera a un Presidente legalmente elegido y disolviera un Congreso también legalmente elegido por el país de otra manera que como un golpe de Estado contra la Constitución.

U. S. A.

LA LENTA CAIDA DE NIXON

ROGERS, KISSINGER, AGNEW
Y EL ATENTADO DE NUEVA ORLEANS

La suposición de un complot para acabar con la vida de Nixon cuando visitaba Nueva Orleans, la sustitución del secretario de Estado Rogers por Kissinger, la ruptura, dentro de la Casa Blanca, entre el presidente y el vicepresidente son algunos de los datos que esta semana se unen a la grave crisis de Nixon en los Estados Unidos, más explícitamente, a la grave crisis de poder en los Estados Unidos durante el segundo mandato de Nixon.

La sustitución de Rogers por Kissinger se presenta desde hace años; las diferencias entre los dos encargados de la política exterior eran públicas, notorias. Pero el hecho de que se resuelva en estos momentos es un indicio más de la crisis del poder y de los esfuerzos de Nixon por no ver en torno suyo más que rostros enteramente amigos, leales y sin reservas.

Con respecto al vicepresidente Agnew, éste se queja de que el apoyo de Nixon en el momento en que está sometido a una investigación federal por una supuesta corrupción política en la época en que era gobernador de Maryland no es suficiente, y parece envolver reservas. Es lógico que Nixon no quiera verse envuelto en nuevo escándalo; difícilmente soportaría más. Pero lo que ha de pagar por esta prudencia, por esta reserva, es una ruptura del poder en el seno mismo de la Casa Blanca. Uno de los colaboradores próximos de Agnew ha dejado circular una frase despectiva, amarga e hiriente: «En realidad, poco importa lo que diga o deje de decir de uno un hombre que no tiene más que un treinta y ocho por ciento de credibilidad»: aludía a que, según las últimas encuestas de opinión pública, Nixon sólo dispone de un treinta y ocho por ciento de opiniones favorables en el país.

En cuanto al supuesto atentado de Nueva Orleans, parece que no hay suficientes pruebas como para continuar con la investigación. Los seis sospechosos principales —militantes negros— están en libertad, solamente vigilados. La sospecha de conjura nació, se dice ahora, porque un confidente de la policía dijo que en una reunión de seis personas —los seis militantes negros— se había discutido el tema de matar a Nixon, y que posteriormente uno de los seis militantes entregó un rifle a otro. No hubo más. Se comprende que en un país como Estados Unidos esta confidencia pueda ser suficiente como para tomar todas las precauciones posibles. El servicio secreto unió estos datos al robo de un uniforme de po-

licía y al del automóvil de un sargento de la policía, y los relacionó con la desaparición de un individuo que hace tres años arrojó una bandera ardiendo contra el coche de Nixon. Le pareció al servicio secreto que todo ello constituía un motivo suficiente como para anular el paso del cortejo presidencial por las calles de Nueva Orleans, y así lo hizo. Sin embargo, no faltan voces que digan que el anuncio del complot estaba preparado bien por Nixon, bien por sus servicios de relaciones públicas y propaganda, con objeto de hacerle recuperar algo de la popularidad perdida; un presidente amenazado de muerte es siempre un presidente que recibe adhesiones.

Mientras tanto, el contencioso del escándalo Watergate sigue creciendo. Ahora las investigaciones encuentran que en la lista de donativos a Nixon para su campaña electoral hay por lo menos millón y medio de dólares de procedencia ilegal. Está prohibido en los Estados Unidos que las corporaciones, las compañías, ofrezcan fondos propios para cualquier campaña electoral, para evitar que se conviertan así en medios de presión y que puedan obtener posteriormente beneficios del elegido gracias a sus fondos. En la lista de contribuyentes voluntarios investigada en la Casa Blanca se encuentran unos dos mil nombres, y un total de unos veinte millones de dólares donados. Entre cincuenta y sesenta nombres pertenecen a compañías o empresas, pero no todos pueden considerarse ilegales: los donativos hechos personalmente por ejecutivos de esas compañías no son perseguibles. Pero unos quince o veinte donativos están hechos, aparentemente, con fondos que no puede considerarse como personales, sino de las empresas en sí. Aparecen entre ellas la American Airlines, la Ashland Oil, la Gulf Oil, la Goodyear, la Phillips Petroleum, la Minnesota Mining and Manufacturing... Y sus dirigentes van a recibir una citación para que comparezcan ante la comisión senatorial que investiga el caso Watergate.

En un recuadro, el semanario «Newsweek» alude a la demolición moral y física de Nixon, como consecuencia de esta profunda crisis. Cita a un viejo amigo: «Ha envejecido de tal manera que difícilmente se puede creer». Otro visitante asegura que cuando se le habla hay que repetir las cosas dos veces para asegurarse de que las ha comprendido. Y ahora se cita su intemperancia,